

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 2022-00144.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente al **recurso de reposición** formulado por la parte demandada, contra el auto de fecha 1º de marzo de 2022 mediante el cual se libró mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

1. La parte recurrente adujo que el pagaré No. 7028492, aportado como base de la ejecución, no cumple con los requisitos propios del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del C.G.P.

Señaló que se constituyó en deudor del BANCO DAVIVINDA S.A, mediante la adquisición del producto financiero denominado crédito de consumo, el cual conforme al formato de solicitud de crédito No. 79602 de fecha 19 de agosto de 2015 se solicitó por una suma total de \$65.583.458 que comprende la obligación No. 5904-0490-0003-224 por valor de \$21.791.322 y la obligación No. 5904-0490-0003-0232 por valor de \$32.861.776, no mediante el pagaré No. 7028492 ni por la suma allí consignada \$103.043.825 m./cte, amén que las referidas obligaciones no se encuentran contempladas en las que fueron objeto de la compraventa perfeccionada mediante la escritura pública No. 8844 de 16 de mayo de 2019.

Agregó que, el pagaré se suscribió como respaldo de un contrato de mutuo celebrado con la parte ejecutante, se giró en blanco y su diligenciamiento debía efectuarse de conformidad con la carta de instrucciones de modo que se trata de un título ejecutivo complejo y en el caso concreto no se aportó prueba alguna para establecer de manera inequívoca que el monto plasmado en el título valor en efecto corresponde a la sumatoria de todas las obligaciones a su cargo, sin incluir intereses o que al menos se relacione el valor correspondiente a cada una de ellas, de ahí que el documento base de la acción carezca de claridad y se presente falta de legitimación en la causa por activa.

2. De conformidad con los artículos 110 del Código General del Proceso se corrió traslado del recurso de reposición a la parte actora, quien dentro del término legal se opuso a su prosperidad argumentando que el pagaré No. 7028492 cumple con los requisitos formales, en tanto que, es claro, expreso y exigible, teniendo en cuenta que su diligenciamiento se deriva del incumplimiento del pago de las obligaciones relacionadas en la demanda, las cuales versan sobre un capital insoluto por valor de \$103.043.825.

De otro lado, indicó que las obligaciones No. 5904-0490-0003-224 y No. 5904-0490-0003-0232 no se encuentran contempladas dentro de la escritura de pública No. 8844 de 16 de mayo de 2019, porque la obligación que se ejecuta es la No. 05904049000041338, el pagaré se endosó en blanco y su diligenciamiento se efectuó conforme a lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio de acuerdo con la carta de instrucciones y la autorización emitida por el demandado.

III. CONSIDERACIONES

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2. Ahora bien, para resolver el asunto puesto a consideración cumple precisar que tratándose de procesos ejecutivos que son aquellos tendientes a la obtención del cumplimiento forzoso de una pretensión que se adeuda y que resulta de un título que tiene fuerza por sí mismo de plena prueba, exige que los acreedores para poder hacer efectivas las obligaciones sobre el patrimonio del deudor, deben aportar un instrumento que a su vez debe contar con determinadas calidades, pues debe ser contentivo de una obligación clara, expresa y exigible en contra del demandado y a favor del acreedor demandante, reuniendo los requisitos determinados en el Artículo 422 del Código General del Proceso.

De lo anterior se desprende que en el ordenamiento jurídico exige para el cobro coercitivo de una obligación como presupuesto básico la presencia de un título ejecutivo que debe acreditar sin lugar a dudas la existencia de una obligación a favor del acreedor y en contra del demandado en todo su contenido sin necesidad de acudir a una indagación preliminar, de modo que, se debe estar en posesión de un documento constituido previamente que de manera indiscutible acredite la prestación en todos sus aspectos, a tal punto que de ella emerja claramente de su simple lectura sin que sea menester acudir a interpretación alguna cualquiera de los elementos que la integran.

Al respecto, el tratadista Oscar Eduardo Henao Carrasquilla en comentarios al precitado artículo 422 del Código General del Proceso, precisó:

*“El título ejecutivo debe reunir los requisitos señalados en la ley. La inexistencia de esas condiciones legales hace del título un documento anómalo, incapaz de prestar mérito ejecutivo. En otros términos, nadie niega la existencia del título, lo que se ataca es su idoneidad para la ejecución. En consecuencia, para que el título sea ejecutivo, para que pueda emplearse en un proceso de ejecución, debe contener los siguientes requisitos: a. Que conste en un documento; b. Que ese documento provenga del deudor o su causante; c. Que el documento sea auténtico o cierto; d. Que la obligación contenida en el documento sea clara; e. Que la obligación sea expresa; f. Que la obligación sea exigible y, g. Que el título reúna ciertos requisitos de forma.”*¹

Cuando se trata de títulos valores la normatividad mercantil en su artículo 619 los define como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, pudiendo destacarse de tal definición la concurrencia de unos presupuestos sustanciales consistentes en la literalidad, autonomía, legitimación e incorporación.

Es decir, el derecho por el que se crea el título está plenamente representando en el instrumento sin que sea menester verificar las condiciones del negocio jurídico que le dio origen, siendo así, en lo que tiene que ver con la literalidad cabe aclarar que hace referencia al alcance del derecho como tal debiendo ceñirse tanto el acreedor como el deudor única y exclusivamente a lo allí consignado. Al respecto el tratadista Hildebrando Leal Pérez en comentarios al precitado canon señaló:

¹ Henao Carrasquilla Oscar Eduardo, C. G. P. artículo 422 (2021), pag 539, Leyer Editores.

“La norma hace referencia al ejercicio del derecho literal, para dar a entender el derecho escrito, el contenido impreso en el título valor. La literalidad debe ser examinada desde dos puntos de vista: Activa y Pasiva. Conforme con la primera, el tenedor de un título valor no podrá invocar más derechos de los que aparecen en el documento, ni puede pretender exigir derechos distintos de los allí insertos. Por medio de la literalidad pasiva, se expresa que el obligado o interviniente en un título valor no podrá ser forzado a atender prestaciones distintas a las que reza el documento y cumplirá su obligación en la medida que pague la prestación que se describe en el mismo”²

De cara a los requisitos formales, se deben distinguir unos elementos esenciales generales, es decir, comunes a todos los títulos valores, consagrados en el artículo 621 del Código de Comercio, a saber: **i)** La mención del derecho que en el título se incorpora y, **ii)** la firma de quien lo crea, además de unas exigencias particulares, que para el caso del pagaré se encuentran dispuestas en el artículo 709 ibídem, como son: **i)** la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, **ii)** el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, **iii)** la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y **iv)** la forma de vencimiento.

En ese orden de ideas, se tiene que en el evento en que el extremo pasivo del litigio mediante recurso de reposición cuestiona el mandamiento de pago lo debe hacer con fundamento únicamente en causas de defectos formales o legales del título aportado como base de la acción pues de otro modo si se debiese acudir a otros medios probatorios, la impugnación de la ejecución sólo será posible a través de los medios exceptivos previstos en la ley y los cuales deben ser objeto de análisis y posterior pronunciamiento en la etapa procesal oportuna sin que sea ésta al desatar tal remedio en los términos del inciso segundo del artículo 430 del estatuto procesal.

3. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la falta de legitimación en la causa por pasiva es dable recordar que la misma constituye un presupuesto sustancial de la acción y no procesal, motivo por el que, en caso de encontrarse acreditada tal circunstancia la consecuencia jurídica a que dé lugar debe ser declarada en la sentencia. En relación a este tópico la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló:

*“...Preciso es notar cómo la legitimación en la causa, ha dicho insistentemente la Corte, **es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal**, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste. Por eso, **su ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis, sino motivo para decidirla adversamente**, pues ello es lo que se aviene cuando quien reclama un derecho no es su titular o cuando lo aduce ante quien no es el llamado a contradecirlo, pronunciamiento ese que, por ende, no sólo tiene que ser desestimatorio sino con fuerza de cosa juzgada material para que ponga punto final al debate, distinto de un fallo inhibitorio carente de sentido lógico por cuanto tras apartarse de la validez del proceso siendo éste formalmente puro, conduce a la inconveniente práctica de que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo o para que siéndolo en la realidad lo aduzca nuevamente frente a quien no es el llamado a responder...”³ (énfasis fuera de texto).*

4. Ahora, previo a abordar el asunto de fondo, cumple precisar que el recurso de reposición que ahora ocupa la atención del despacho se formuló dentro de la oportunidad correspondiente habida cuenta que la parte actora no aportó documento alguno en el que conste el trámite de notificación adelantado para efectos de contabilizar el término con el que contaba el extremo pasivo de ahí que con la interposición de este medio de defensa el enteramiento se entienda surtido

² (2021) Código de Comercio, Hildebrando Leal Pérez, Comentarios al artículo 619, Editorial Leyer, pag 411.

³ S-094 de agosto 14 de 1995, M.P.: Nicolás Bechara Simancas

por conducta concluyente de acuerdo con lo previsto en el artículo 301 del Código General del Proceso.

5. Conforme a las anteriores precisiones descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que la providencia objeto de censura se encuentra ajustada a los parámetros exigidos por la ley toda vez que el documento que acompañó a la demanda como báculo de la ejecución- **Pagaré No. 7028492** reúne los requisitos de forma necesarios para que pueda demandarse ejecutivamente y en consecuencia, ningún reparo cabe hacer sobre su condición de título ejecutivo, pues contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero – \$103.043.825 a favor de BANCO DAVIVIENDA S.A cuyo vencimiento se pactó a una fecha cierta y determinada, 3 de febrero de 2022 y se indica de manera precisa el obligado cambiario que no es otro que el aquí demandado, amén que se transfirió a la sociedad ejecutante AECSA S.A. conforme a su ley de circulación a través de la figura de endoso, de manera que se encuentran acreditados los requisitos de carácter general y especial consagrados en la normatividad mercantil.

Ahora bien, en cuanto a que el título valor base de la acción no fue diligenciado conforme a la carta de instrucciones y que la suma allí relacionada no corresponde a los valores realmente desembolsados, la inclusión de obligaciones distintas a las realmente adquiridas, sumado al hecho que, la sociedad ejecutante carece de legitimación en la causa por activa, los cuales fueron argumentos centrales del presente recurso, cumple precisar que constituyen circunstancias fácticas que sin hesitación alguna deben ser alegadas a través de las excepciones de mérito que tienen que ser definidas y resueltas en la oportunidad procesal pertinente, esto es, la sentencia, toda vez que, los mismos revisten asuntos de carácter sustancial y no se encuentran encaminados a enderezar el procedimiento o la estructura de la demanda.

Sobre el particular la Corte Constitucional en Sentencia T-283 de 2013 realiza una clara diferenciación frente a las condiciones sustanciales y las condiciones formales con las que debe contar el título ejecutivo, siendo éstas últimas las que la ley prevé se pueden estudiar mediante recurso de reposición formulado contra la orden de apremio así:

“...De estas normas se deriva que los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales.

Las condiciones formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

(...)

Las condiciones sustanciales exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es **clara** la obligación que no da lugar a equívocos, es decir, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Que sea **expresa** implica que de la redacción misma del documento aparece nítida y manifiesta la obligación. Que sea **exigible** significa que su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, es decir, que se trata de una obligación pura y simple y ya declarada.”

6. En ese orden de ideas comoquiera que los argumentos planteados en el recurso de reposición no versan sobre asuntos formales del título base de la ejecución ni del escrito de demanda, sino que buscan enervar en todo o en parte el mandamiento de pago librado en el presente asunto y atacan en estricto sentido las pretensiones del libelo introductor, se traducen en aspectos de carácter sustancial que deben ser resueltos en un estadio procesal distinto, en consecuencia, no hay lugar a revocar la providencia censurada.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

PRIMERO: MANTENER INCÓLUME el auto el auto de fecha 1º de marzo de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGÚNDO: Reconocer personería a Nidia Esperanza Rivera Suancha como apoderada judicial del demandado JOSSIE ESTEBAN MESA ESCANDÓN en los términos y para los fines del poder conferido.

En consecuencia, téngase notificado por conducta concluyente conforme lo dispuesto en el artículo 301 del Código General del Proceso, por secretaría remítase copia del mandamiento de pago y la demanda junto con sus respectivos anexos a la parte convocada y contrólese el término con que cuenta la pasiva para contestar la demanda y proponer excepciones.

Notifíquese,⁴

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

⁴ Esta providencia se notificó por estado No. 56 de 3 de junio de 2022.

Código de verificación: **65ff69e8c0f51ded733c9be8c48fc00c858c41e852157fdeb767e8392d4f852e**

Documento generado en 02/06/2022 02:18:52 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>